



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Informe

Número:

Referencia: INFORME DE CIERRE-AUDIENCIA PÚBLICA DEL 6 DE DIC DE 2022. TRATAMIENTO PRECIOS GAS NATURAL RESPECTO DE LA PORCIÓN DEL PRECIO QUE EL E. N. PODRÁ TOMAR A SU CARGO EN LOS TÉRMINOS DEL ART. 6° DEL DEC. N° 892 DEL 13 DE NOV DE 2020 Y SU MODIF.

INFORME DE CIERRE - AUDIENCIA PÚBLICA DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2022. TRATAMIENTO PRECIOS DEL GAS NATURAL RESPECTO DE LA PORCIÓN DEL PRECIO QUE EL ESTADO NACIONAL PODRÁ TOMAR A SU CARGO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 6° DEL DECRETO N° 892 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y SU MODIFICATORIO DECRETO N° 730 DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2022. RESOLUCIÓN S.E. N° 771/2022 (EX-2022-121440322-APN-SE#MEC).

A LA SEÑORA SECRETARIA DE ENERGÍA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA

I.- ANTECEDENTES

El presente informe da cuenta sumaria de las exposiciones presentadas en el marco de la Audiencia Pública convocada por la Resolución N° 771 de fecha 11 de noviembre de 2022 de la Secretaría de Energía, y se eleva para su consideración de acuerdo a lo previsto por el Artículo 36, Capítulo IV, del Anexo I del Decreto N° 1.172/2003 y por el Artículo 1° de la Resolución N° 809 de fecha 2 de diciembre de 2022 de la Secretaría de Energía.

A efectos de su elaboración se ha considerado la versión taquigráfica confeccionada en oportunidad de la mentada Audiencia por el personal contratado al efecto, siguiendo el Orden del Día oportunamente publicado en la página web, lo que puede ser consultado a través de la página web de la Secretaría de Energía: www.argentina.gob.ar/economia/energia. En dicho sitio, obra también la referida versión taquigráfica.

Se deja constancia que en la Audiencia se inscribieron DOCE (12) oradores, habiéndose contemplado la participación de UN (1) orador adicional, la que fuera aprobada por el Presidente de la Audiencia, de conformidad con lo previsto en el Artículo 32 del Anexo I del Decreto N° 1.172/2003 y en virtud de las facultades que le confiere el inciso c) del Artículo 27 de dicha normativa, siendo el total de expositores inscriptos de TRECE (13).

El objeto de la Audiencia Pública ha sido delimitado por el Artículo 1° de la señalada Resolución S.E. N°

771/2022, y es el de evaluar y dar tratamiento a los precios del gas natural respecto de la porción del precio que el ESTADO NACIONAL podrá tomar a su cargo en los términos del Artículo 6° del Decreto N° 892 de fecha 13 de noviembre de 2020 y su modificatorio Decreto N° 730 de fecha 3 de noviembre de 2022.

De acuerdo a lo indicado por el Artículo 2° de la Resolución S.E N° 809/2022, la Audiencia Pública fue presidida por el Sr. Subsecretario de Hidrocarburos de esta Secretaría, Bioquímico Federico BERNAL. Asimismo, corresponde indicar que el procedimiento de la misma se rigió en un todo conforme a las disposiciones del Anexo I del Decreto N° 1.172/2003.

II.- INICIO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA

El Presidente de la Audiencia Pública, luego de informar del procedimiento, la normativa que la rigió y de detallar los hechos y el derecho que son antecedentes y fundamentos de la celebración de la Audiencia Pública en cuestión, aprobó el correspondiente Orden del Día.

III.- EXPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA

Seguidamente, el Presidente de la Audiencia Pública realizó una exposición gráfica apuntalada en el informe técnico oportunamente elaborado en forma conjunta por la Dirección de Tarifas y Regalías de la Dirección Nacional de Economía y Regulación y la Dirección Nacional de Exploración y Producción, ambas dependientes de la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, a efectos de dar a conocer los diferentes escenarios proyectados en función de diferentes propuestas para la determinación de los nuevos precios del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

Dicho informe, como así también la presentación gráfica desarrollada en el curso de la Audiencia, se encuentran disponibles para su consulta en la página web de la Secretaría de Energía: www.argentina.gob.ar/economia/energia.

Primeramente, el Sr. Subsecretario efectuó una breve descripción del estado de situación actual, señalando al respecto que, de mantenerse el mismo, el Estado Nacional cubriría alrededor del SESENTA Y SIETE COMA TRES POR CIENTO (67,3%) del costo del abastecimiento del gas natural para abastecer la demanda prioritaria en 2023.

En tal sentido, informó que, considerando las distintas fuentes de abastecimiento – que son la oferta de producción nacional de gas natural, las importaciones desde Bolivia por gasoductos y el GNL–, se estima que el costo total de compra del gas para la demanda prioritaria sería de aproximadamente SEICIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$653.500.000.000), equivalente en dólares a DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES (2.935.000.000), asumiendo un precio promedio de oferta (nacional e importada) de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCO COMA VEINTIDOS CENTAVOS (USD\$ 5,22) por millón de BTU.

Continuó señalando que, de mantenerse la situación actual, los usuarios y usuarias afrontarían un equivalente a DÓLARES ESTADOUNIDENSES UNO COMA SETENTA CENTAVOS (USD\$ 1,7) por millón de BTU, quedando el resto a cargo del Estado Nacional, por un equivalente a DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRES COMA CINCUENTA CENTAVOS (USD\$3,5) el millón de BTU.

Destacó el incremento sostenido que se ha verificado en los precios internacionales de la energía en los últimos años, a raíz de varios factores, tales como la irrupción del COVID -19, y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

En tal sentido, resaltó la relevancia de dicho incremento en los costos energéticos mundiales para nuestro país, dado que somos importadores de combustibles y de Gas Natural Licuado (GNL), impactando de tal modo la dinámica de los precios internacionales en un mayor requerimiento de divisas para la importación de energía, con el consecuente mayor esfuerzo fiscal en materia de subsidios.

Seguidamente, señaló que la información gráfica exhibida, expone la evolución del precio del gasoil y del GNL desde enero de 2018 a octubre de 2022, evidenciando que el que el precio del GNL para diciembre de 2020 tenía un valor de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CATORCE (USD\$ 14) el millón de BTU, valor que más que se duplicó a fines de 2021, para alcanzar un pico de casi DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCUENTA Y CUATRO (USD\$ 54) el millón de BTU en agosto de este año. Añadió que, actualmente, la cotización del GNL en Europa supera los DÓLARES ESTADOUNIDENSES CUARENTA (USD\$ 40) el millón de BTU.

Con relación al gasoil, señaló que el gráfico expone una situación de precios semejante a la del GNL.

A continuación, el Sr. Subsecretario se refirió a qué porción del precio del gas natural pagan los usuario y usuarias del servicio de gas por redes, y qué porción queda a cargo del Estado Nacional, estimación realizada en base mensual para el año 2023.

Al respecto, señaló que, de conformidad con el informe técnico y la exposición gráfica que dio soporte a su exposición, se estima que el precio promedio ponderado para el abastecimiento de la demanda prioritaria sería de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCO COMA VEINTIDOS CENTAVOS (USD\$ 5,22) por millón de BTU, del cual, asumiendo la vigencia de los precios actuales a partir de 2023, aproximadamente DÓLARES ESTADOUNIDENSES UNO COMA SETENTA CENTAVOS (USD\$ 1,7) por millón de BTU, lo pagarían los usuarios, mientras que los DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRES COMA CINCUENTA CENTAVOS (USD\$ 3,5) restantes los cubriría el Estado Nacional bajo la forma de subsidios, representando poco más del SESENTA Y SIETE COMO TRES POR CIENTO (67,3%) del costo total de abastecimiento. Adicionalmente, señaló que dicho porcentaje de cobertura del Estado Nacional, es mayor en los meses de invierno, cuando ingresa la inyección de GNL, que es el combustible más caro del sistema de gas.

Seguido a ello, y de acuerdo al gráfico exhibido, el Sr. Subsecretario expuso el costo estimado para el Estado Nacional ante distintos escenarios de cubrimiento del precio por parte del mismo. Informó al respecto que, si el Estado Nacional se hiciera cargo del CIEN POR CIENTO (100%), el costo sería de PESOS SEICIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS MILLONES (\$653.500.000.000). Señaló que, de mantenerse la situación actual, el costo para el Estado Nacional sería de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN MILLONES (\$ 439.921.000.000), y los usuarios y usuarias de la demanda prioritaria abonarían PESOS DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES (\$ 213.577.000.000).

Análogamente expuso, con sustento en la imagen gráfica exhibida, el precio promedio del gas natural que abonaría la demanda prioritaria ante diferentes escenarios de cobertura del precio por parte del Estado Nacional, señalando que, en la situación actual, el precio promedio para los usuarios se estima en PESOS CATORCE COMA SIETE CENTAVOS (\$ 14,07) por metro cúbico, en tanto que, de no tomar el Estado Nacional a su cargo costo alguno, y todo el costo recayera sobre los usuarios, el precio promedio sería de PESOS CUARENTA Y DOS COMA NOVENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 42,93) por metro cúbico.

A continuación, el Sr. Subsecretario destacó que el Decreto N° 332 de fecha 16 de junio de 2022, creó un régimen de segmentación de subsidios de los servicios energéticos, con el objeto de lograr valores de la energía razonables

y susceptibles de ser aplicados con criterios de justicia y equidad distributiva. Al respecto, señaló que dicha medida, y tal como fuera mencionado en reiteradas oportunidades tanto por el Sr. Ministro de Economía, como por la Sra. Secretaria de Energía, busca hacer un uso eficiente, tanto de recursos naturales como de los recursos económicos y fiscales del Estado Nacional.

Añadió que, en el referido decreto, se definieron las características que deben reunir los usuarios y usuarias para ser contemplados dentro del mencionado régimen de segmentación, en el cual fueron determinados tres niveles de usuarios: Nivel 1, aquellos usuarios y usuarias de mayores ingresos; Nivel 2, aquellos usuarios y usuarias de menores ingresos; y Nivel 3, usuarios y usuarias considerados de ingresos medios, no comprendidos en los Niveles 1 y 2.

En tal contexto, y de acuerdo a la imagen gráfica exhibida, informó una estimación del precio promedio a nivel nacional de cada una de las categorías que integran la demanda prioritaria, de aplicación en el mes de enero de 2023, señalando que los usuarios del Nivel 1 pagarán en promedio un valor cercano a los PESOS VEINTIDOS COMA SESENTA CENTAVOS (\$ 22,6) por metro cúbico, en tanto que los del Nivel 2 pagarán uno cercano a PESOS OCHO COMA CINCUENTA CENTAVOS (\$ 8,5) por metro cúbico.

Seguidamente, informo que los usuarios del Nivel 3, abonarán un precio para el bloque subsidiado y otro para el bloque excedente, conforme lo dispuesto por esta Secretaría a través de la Resolución N° 686/2022. En tal sentido, señaló que el precio promedio del bloque subsidiado, a partir de enero, será cercano a PESOS OCHO COMA CINCUENTA CENTAVOS (\$ 8,5) por metro cúbico (equivalente al precio promedio del Nivel 2), mientras que el precio promedio del bloque excedente será de alrededor de PESOS VEINTIDOS COMA CINCUENTA CENTAVOS (\$ 22,5) por metro cúbico (equivalente al precio promedio del Nivel 1). De tal modo, los usuarios y usuarias Nivel 3, cuyo consumo exceda el bloque que va a estar subsidiado, pagarán por dicho consumo excedente el precio del gas equivalente al precio que paga un usuario o usuaria de Nivel 1.

Señaló que los usuarios del Servicio General P (SGP), que incluye a comercios, PyMEs y pequeñas industrias, pagarán un precio que está en línea con el bloque subsidiado del Nivel 3, resultando en tal caso, el precio promedio de PESOS OCHO COMA OCHENTA CENTAVOS (\$ 8,8) por metro cúbico en enero.

En tal contexto, el Sr. Subsecretario destacó que cualquier modificación que se dé, en función de las exposiciones en el curso de la Audiencia Pública, y su respectivo análisis por la Secretaria de Energía, impactará sobre los precios de los distintos niveles de usuarios, como así también del SGP.

Continuó señalando que, con sustento en la información expuesta, se ensayaron CUATRO (4) escenarios de precios con el objetivo de brindar una caracterización descriptiva de los eventuales impactos en factura para los distintos niveles de usuarios residenciales.

En tal sentido, expresó que en el Escenario 1 plantea el mantenimiento de los precios del gas en tarifa vigentes para enero de 2023 y durante todo el año, y que, los otros TRES (3) escenarios prevén incrementos.

Señaló en particular, que el Escenario 4 plantea un incremento del precio en PIST para todos los niveles de usuarios, conforme a los siguientes lineamientos:

Respecto de los usuarios del Nivel 1, se asume un CERO POR CIENTO (0%) de cobertura por parte del Estado Nacional, lo que redundará en un incremento del precio en tarifa de casi SESENTA Y CINCO POR CIENTO (65%); para los usuarios Nivel 3, se asume un aumento del SESENTA Y CINCO POR CIENTO (65%) sobre el precio del bloque subsidiado, mientras que los consumos excedentes quedarían valorizados al nuevo precio para

el Nivel 1.

Para el Nivel 2 se prevé, en este Escenario, un incremento equivalente a la mitad del previsto en porcentaje para los otros dos niveles (TREINTA Y DOS POR CIENTO (32%)).

Seguidamente, mencionó que los Escenarios 2 y 3 presentan una adecuación parcial del Escenario 4. Así, el Escenario 2 supone la aplicación de un TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) de los incrementos previstos en el Escenario 4, en tanto que el Escenario 3 plantea correcciones que son el SESENTA Y SEIS POR CIENTO (66%) de las proyectadas en el Escenario 4.

A continuación, y conforme la imagen gráfica exhibida, el Sr. Subsecretario expuso algunos ejercicios de impacto en factura tomando en consideración los usuarios R31 Subzona A, con un consumo medio de NOVENTA Y CINCO METROS CÚBICOS (95 m3) por mes.

Señaló al respecto que, considerando al usuario residencial de dicha Subzona Nivel 1, que tendría una factura mensual (promedio anual) de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SIETE (\$ 4.907), asumiendo el mantenimiento de los precios vigentes en enero de 2023, la factura se incrementaría en PESOS SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE (\$ 779), equivalente a un DIEZ Y SEIS POR CIENTO (16%), de aplicarse lo previsto en el Escenario 2; en PESOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO (\$ 1.558), equivalente a TREINTA Y DOS POR CIENTO (32%), en el Escenario 3; y finalmente en PESOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO (\$2.361), equivalente a un CUARENTA Y OCHO POR CIENTO (48%) en caso de adoptarse lo planteado en el Escenario 4. Sobre el particular, destacó la importancia de recordar que, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto N° 332/2022, los usuarios Nivel 1 son aquellos que abonan el costo pleno de la energía.

Añadió que el precio en PIST que los usuarios Nivel 1 abonan en la actualidad en dicha subzona, se estima en un promedio de PESOS VEINTISIETE (\$27) por metro cúbico, mientras que los usuarios del Nivel 2 abonan en promedio PESOS DIEZ (\$10) por metro cúbico y los Nivel 3 pagan casi PESOS DIEZ Y OCHO (\$18) por metro cúbico.

En el sentido expuesto, destacó la relevancia de la política de segmentación, cuya implementación por primera vez en la historia del servicio público de gas por redes, fue anunciada a días de haber asumido como Ministro de Economía, por el Dr. Sergio Massa, y también por la Secretaria de Energía, en conferencia de prensa. Al respecto, añadió que el objetivo de dicha política es el de propender al uso eficiente de nuestros recursos naturales y económicos, y que su implementación está siendo exitosa.

Retomando la exposición de los escenarios de impacto en factura para un usuario R31 Subzona A, Nivel 2, el mismo tendría una factura promedio de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO (\$2.621) por mes, con incrementos por aplicación de los Escenarios 2, 3 y 4 de CIENTO CUARENTA Y SEIS (146), DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS (292) y CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES (443) PESOS (\$), respectivamente. Finalmente, con relación al usuario Nivel 3 de la Subzona en cuestión, quien en promedio anual paga una factura de PESOS TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO (\$ 3.718) por mes, vería incrementarse su factura por aplicación de los Escenarios 2, 3 y 4 en QUINIENTOS VEINTISEIS (526), MIL CINCUENTA Y DOS (1.052) y MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES (1.593) PESOS (\$), también respectivamente.

Seguido a ello, y de acuerdo a la tabla exhibida, el Sr. Subsecretario expuso el mismo ejercicio de proyección de escenarios, pero esta vez para consumos tipo de usuarios R 31 en Subzona B, con un consumo promedio de NOVENTA Y DOS METROS CÚBICOS (92 m3) por mes. Señaló, con relación al usuario residencial de dicha Subzona Nivel 1, su factura mensual (promedio anual) sería de PESOS CUATRO MIL CIENTO DOCE (\$

4.112), asumiendo el mantenimiento de los precios vigentes en enero de 2023. Esa factura se incrementaría en PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO (\$ 664), equivalente a un DIECISEIS POR CIENTO (16%) de aplicarse lo previsto en el Escenario 2, en PESOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE (\$ 1.329), equivalente a TREINTA Y DOS POR CIENTO (32%) en el Escenario 3. Finalmente, el incremento sería de PESOS DOS MIL TRECE (\$ 2.013), equivalente a un CUARENTA Y NUEVE POR CIENTO (49%) en caso de adoptarse lo planteado en el Escenario 4.

Respecto al usuario tipo Nivel 2 de la misma subzona, informó que éste tendría una factura promedio de PESOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS (\$ 2.162) por mes, con incrementos por aplicación de los Escenarios 2, 3 y 4 de CIENTO VEINTICINCO (125), DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE (249) y TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO (378) PESOS (\$), respectivamente. En tanto que un usuario Nivel 3, que en promedio anual en esta subzona paga una factura de PESOS DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE (\$ 2.747) por mes, vería incrementarse su factura por aplicación de los Escenarios 2, 3 y 4 en TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO (374), SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO (748) y MIL CIENTO TREINTA Y TRES (1.133) PESOS (\$), también respectivamente.

Por último, el Sr. Subsecretario expuso la información gráfica exhibida, relativa a un similar ejercicio de escenarios con relación al Usuario R31 (consumo medio de SEISCIENTOS SETENTA METROS CÚBICOS (670 m3) por mes) en la Subzona C.

Señaló al respecto que el usuario Nivel 1, tendría una factura mensual (promedio anual) de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE (\$6.989) asumiendo el mantenimiento de los precios vigentes en enero de 2023. La misma se incrementaría en PESOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS (\$1.252), equivalente a un DIECIOCHO POR CIENTO (18%) de aplicarse lo previsto en el Escenario 2, en PESOS DOS MIL QUINIENTOS CUATRO (\$ 2.504), equivalente al TREINTA Y SEIS POR CIENTO (36%) en el Escenario 3 y finalmente en PESOS TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO (\$ 3.794), equivalente a un CINCUENTA Y CUATRO POR CIENTO (54%) en caso de adoptarse lo planteado en el Escenario 4.

Respecto al usuario residencial tipo Nivel 2 de la subzona C, tendría una factura promedio de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE (\$ 3.315) por mes, con incrementos por aplicación de los Escenarios 2, 3 y 4 de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO (235), CUATROCIENTOS SETENTA (470) y SETECIENTOS DOCE (712) PESOS (\$), respectivamente. Por último, señaló que un usuario Nivel 3, que en promedio anual en esta subzona paga una factura de PESOS CINCO MIL SETENTA Y NUEVE (\$ 5.079) por mes, vería incrementarse su factura por aplicación de los Escenarios 2, 3 y 4 en OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO (845), MIL SEISCIENTOS NOVENTA (1.690) y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO (2.561) PESOS (\$), también respectivamente.

Finalizada su exposición, el Sr. Subsecretario recordó que el respectivo Informe Técnico, como así también su versión en power point, exhibida en el curso de la Audiencia Pública, fueron oportunamente publicados en la página web de Secretaría de Energía. Por último, agradeció la participación y la escucha.

IV.- EXPOSITORES

A continuación, se detallan las exposiciones realizadas por los oradores, siguiendo el listado publicado en el orden del día:

1.- Fernando Javier Gray, Intendente de la Municipalidad de Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires: En primer lugar, resaltó la participación de todas las organizaciones, entidades, ONGs, vecinos, vecinas y

gobiernos locales en la audiencia y remarcó que ha participado de todas las audiencias públicas de gas, energía eléctrica, así como las convocadas por AySA y, por ello, destacó la figura de un verdadero defensor de los consumidores, que nos dejara hace unos meses, y con quien compartió la participación en numerosas convocatorias, refiriéndose al ex diputado Héctor Polino, con quien participara en todas las audiencias públicas que se realizaron.

Seguidamente, se presentó como intendente del Partido de Esteban Echeverría, de la Provincia de Buenos Aires, informando que dicho municipio cuenta con TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL (383.000 habitantes) y comprende amplias zonas comerciales, industriales y residenciales, con un verdadero abanico de realidades sociales, y con más de CINCUENTA (50) dependencias, incluido un hospital municipal, y para poder hacer oír la voz de los vecinos y vecinas del mismo.

Señalo que luego de la etapa profunda de la pandemia, conocida por todas y todos, se proponen abordar una etapa de pospandemia, caracterizada por un enorme esfuerzo de los sectores productivos, comerciales, profesionales y de la población en general.

Indicó que sabida es la situación de la economía a nivel local y nacional en un contexto global de crisis y, por ello, resaltó el enorme esfuerzo económico que hacen los distintos sectores sociales de su comunidad y, en particular, los sectores medios, medios trabajadores, y los más vulnerables, donde cada factura de servicio público es vivida con enorme preocupación y donde se hace un gran esfuerzo por llegar a fin de mes.

Por ello, sostuvo que en este momento resulta más importante que nunca resaltar el principio de razonabilidad y que no se pueden desconocer los aumentos de precios, pero que es hora de hacer esfuerzos compartidos.

Manifestó que las empresas, así como lo hace el Estado, deben colaborar y que, por ello, tal como lo han hecho en los municipios al no aumentar las tasas municipales en la misma proporción que han aumentado los insumos, productos y costos, solicitó que éstas hagan el esfuerzo de optimizar sus costos y tratar de que los usuarios y consumidores tengan el menor impacto posible, reconociendo el enorme esfuerzo, una vez más, que hace el Estado Nacional.

Asimismo, resaltó DOS (2) situaciones especiales de los sectores más postergados, refiriéndose al caso del GNC y al gas envasado, sosteniendo que es un tema invisibilizado, pero que, a diario, cientos de trabajadores y trabajadoras utilizan el mismo para distintos tipos de servicios: su vehículo particular a GNC como medio de transporte o fuente laboral, y solicitó que se tenga especialmente en cuenta esta situación.

Por otro lado, sostuvo que muchos de sus vecinos y vecinas que no tienen acceso al servicio de gas de red deben recurrir al gas envasado y, por ello, solicitó que se tenga especialmente en cuenta la situación de los mismos.

Manifestó que la cuestión del gas envasado queda muchas veces invisibilizada, ello porque cuando hablamos de gas suponemos que toda nuestra población tiene gas de red, pero en nuestro conurbano la situación es bien distinta por esta y otras cuestiones.

Para concluir, y sin dejar de remarcar el déficit histórico en materia energética, expresó su satisfacción por el impulso que ha emprendido la nueva gestión de la Secretaría de Energía, señalando la permanente necesidad de inversiones energéticas en nuestro territorio.

Finalmente, reiteró la necesidad de aplicación del sentido de razonabilidad en las actualizaciones de tarifas que terminan impactando en la población en general e indicó que las tarifas que pagan los usuarios están muy por

debajo de los salarios, pero que el problema es que los salarios siguen muy por detrás de la inflación, mientras los costos de la energía se incrementan no solo por la inflación, sino también por los efectos de los precios internacionales.

2 y 3.- Marisa Sánchez, en representación de la Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de la Regional Mar del Plata y en nombre propio: Indicó que cuando se les plantea estas convocatorias se vuelven a encontrar con las mismas preguntas y las mismas mentiras: ¿quién les va a decir cuál es el precio del gas en boca de pozo?, agregando que hoy no saben cómo se obtiene este precio desde que el gas por redes se declaró servicio público y que desconocen cómo llega este número a la factura del usuario.

Sostuvo que la Ley N° 24.076 solo regula el transporte y la distribución, y que el conflicto comienza ahí, con las petroleras que piden tanto por millón de BTU, y que hasta que no se revea esto, vamos a seguir hablando y dando vueltas sobre lo mismo, que las redes de distribución tienen un desfase y que todas las ampliaciones que cobran las empresas, que las pagan los usuarios, y la contraprestación de tantos metros cúbicos de gas, nunca están en equilibrio.

Continuó expresando que esa institución entiende que el valor actual de la tarifa de gas incumple con el bloque de legalidad que regula la actividad prestacional del servicio público de gas, lo que dice la Ley N° 24.076, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales, en especial la Convención sobre Derechos Humanos y que hoy la tarifa ha dejado de ser justa y razonable, resultando confiscatoria para el usuario y que, a su vez, ha perdido equidistancia con la eficiencia y la seguridad del servicio, habiendo generando dicha situación un punto de conflicto entre usuarios, prestadores y los actores políticos.

Sostuvo que una rebaja o congelamiento de tarifas prolongado violenta el margen de rentabilidad razonable y atenta contra la seguridad y eficacia en la prestación del servicio público.

Agregó que, para Mar del Plata, el beneficio de zona fría no ha sido de gran impacto positivo a los usuarios y que, en esa cuestión, deberían reverse las categorías de usuarios y también analizarse el tema del gas envasado ya que Mar del Plata también tiene usuarios que no tienen gas por red.

Indicó que el aumento desmedido, intempestivo, arbitrario y trasladado en su totalidad al usuario produce indefectiblemente un exceso de onerosidad, violentando el pleno ejercicio del derecho de la propiedad constitucionalmente garantizado que deviene, ineludiblemente, en la imposibilidad de pago por parte del usuario y en la interposición generalizada de remedios procesales con el fin de evitar la interrupción del servicio público en cuestión, entendiéndose que, en ese contexto, el Estado debe intervenir directamente para asegurar la prestación de la actividad, toda vez que sigue siendo titular del servicio público de gas, aunque haya delegado oportunamente el ejercicio temporal, no pudiendo desprenderse de la responsabilidad directa y objetiva, más allá de las excepciones de la Ley N° 26.944 que previene responsabilidad del Estado.

Sostuvo que consideran imperioso intervenir en el componente de la tarifa liberado al mercado internacional; esto es, el punto de ingreso, y que el precio dolarizado y sujeto a la libertad del mercado de este componente de la tarifa en el marco internacional y nacional mencionado hacen imposible dar fiel cumplimiento a la razonabilidad que deben comprometer a los otros elementos de la tarifa, que son la distribución y el transporte, y que el traslado arbitrario y perjudicial deviene irremediablemente en el precio de la tarifa que se le cobra al usuario.

Manifestó que el Estado debe garantizar accesos a niveles de cobertura y calidad en los servicios públicos y que es importante hoy dar discusión en la pesificación de tarifas y que el pueblo de la Nación Argentina merece hoy ser tratado con respeto y para eso debe garantizarse la vida digna de cada uno de los habitantes.

Seguidamente, manifestó que le preocupa que no hayan llamado a la audiencia pública de segmentación tarifaria y que Mar del Plata no puede pagar un centavo más en los metros cúbicos de gas ni el Nivel 1, 2 ni 3.

Expresó su preocupación con respecto al gas envasado y el tema de tarifa social, informando que Mar del Plata ha tenido una gran caída en usuarios que tenían tarifa social y hoy ya no la tienen, solicitando respuesta a ese tema.

Finalizó su presentación recordando con afecto al Sr. Héctor Polino.

4.- Javier Ulises Reynoso, Intendente de la Municipalidad de Rivadavia, Provincia de Buenos Aires: Indicó que más allá de que entiende que la audiencia buscará trabajar sobre una tarifa razonable y justa, su exposición tiene que ver con que, en el caso de Rivadavia, la tarifa sea asequible, posible.

Manifestó que su distrito está abastecido en la ciudad de América, su ciudad cabecera, por un sistema que tiene sus limitaciones físicas ya que la ciudad está abastecida a un CINCUENTA POR CIENTO (50 %) por GNC, que lleva un consumo de CATORCE (14) camiones diarios que vienen de la ciudad de Pehuajó y que la ciudad de González Moreno también tiene limitaciones, y que no tienen ampliaciones desde 2013.

Informó que este año, la empresa Camuzzi comenzó la conexión del gasoducto de Trenque Lauquen a América, pasando por la localidad de Fortín Olavarría, la cual no tiene servicio de gas natural y que está previsto el desarrollo del gasoducto, que se estima terminar para mayo del año que viene.

Sostiene que ello resulta problemático ya que América, de esos CATORCE (14) camiones diarios, consume el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de todo lo que puede generar la planta en todo el noroeste y en las distintas ciudades, como Carlos Tejedor, Ameghino, Tres Algarrobos, González Moreno y demás. Al estar dispuesta la válvula de derivación en el acceso a Fortín Olavarría, solicita que se incluya en el plan de inversión una estación de rebaje para poder dar gas a toda esa población, la que sería de alrededor de SEISCIENTOS (600) usuarios, basando dicho pedido en que, si bien entienden que la respuesta es la limitación física del sistema de abastecimiento de gas a la red, hoy esa limitación con el gasoducto va a desaparecer.

Agrega que la limitación la están sufriendo, básicamente, con la asistencia a vecinos -casi OCHOCIENTAS (800) familias- con leña y gas envasado, siendo este último también una problemática de logística, inclusive para conseguir el abastecimiento en localidades más pequeñas.

Informó que, en su zona, esa asistencia también tiene una limitación, que es un sistema no escalable desde la logística y del esfuerzo que hace el municipio para asistir, considerando que con dicho gasoducto empezará a haber un principio de conexión, por lo que han decidido aunar los esfuerzos del municipio para poder llevar adelante las obras, poniéndose a disposición para llevar las obras de la red urbana y conectar a la mayor cantidad de vecinos.

Continúa su presentación manifestando que –más allá de la tarifa que hoy se debate, su razonabilidad y demás– muchos de sus vecinos se debaten entre tener gas y no tenerlo, estando aquellos que no tienen gas, más allá de las complicaciones de la calefacción y demás en los períodos invernales, resaltando el alto costo del abastecimiento a leña –alrededor de TREINTA MIL PESOS (\$30.000) por familia tipo– y la dificultad para conseguir el gas envasado, sobre todo en las poblaciones más rurales, agregando que hay vecinos que deben hacer todo un sistema de electricidad que también obviamente eleva muchísimo los costos.

Manifiesta que el pedido tiene que ver con TRES (3) solicitudes: la posibilidad de aplicación en la ciudad de América, donde hay potencialmente MIL (1.000) usuarios más, teniendo potencialmente cubierto el desarrollo de

otro CINCUENTA POR CIENTO (50%) del casco urbano; la inclusión en el plan de inversión de la estación de rebaje para poder conectar a los SEICIENTOS (600) usuarios de Fortín Olavarría ya que el gasoducto pasa por enfrente de dicha localidad; y poder ampliar el abastecimiento de GNC –ahora que habrá disponibilidad de camiones al conectar América– a la localidad de González Moreno y a un potencial desarrollo de DOSCIENTOS (200) o TRECIENTOS (300) usuarios más que hoy no acceden a la red de gas, agregando que lo que tiene que ver con la ampliación será para hablarlo con las empresas y demás, pero que el municipio está a disposición para llevar adelante la obra y bajar los costos de toda la red urbana.

5.- Jimena Hebe Latorre, Diputada Nacional por la Provincia de Mendoza: La participante no se hizo presente a los efectos de su exposición.

6.- Alberto Calsiano, en representación de la Unión Industrial Argentina: Indicó que el valor del PIST incide en el costo de centrales eléctricas, industrias, entes oficiales, comercio, residenciales, GNC, subdistribuidoras, manifestando que el consumo de todos estos usuarios se distribuye como se muestra en la imagen gráfica exhibida.

Sostuvo que el consumo residencial tiene el VEINTICUATRO POR CIENTO (24%), pero que hay que tener en cuenta que durante el invierno prácticamente se multiplica por TRES (3) ese consumo.

Consultando que sucede con el resto de los usuarios, en especial de los NUEVE MILLONES (9.000.000) que son abastecidos por las distribuidoras, manifestó que de TRES MIL (3.000) usuarios, según la categoría, mediante dos resoluciones –una de la Secretaría y otra del ENARGAS–, SEISCIENTOS CINCUENTA (650) usuarios SGP3 optaron por comprar a una distribuidora en lugar del comercializador, siendo ello válido hasta diciembre de este año y, que a su vez, mediante el Decreto N° 730/2022, los usuarios SGP3 (I) y (II) se incorporan a la distribuidora como demanda prioritaria.

Indicó que luego aparece el otro universo, que son los grandes usuarios que deben comprar en el Mercado Mayorista de Gas y lo hacen mediante contratos anuales que, afortunadamente, pareciera que se están extendiendo en el tiempo y que la industria representa, aproximadamente, el TREINTA POR CIENTO (30%) de la demanda total, la cual tiene el precio desregulado, llegando a pagar por el PIST valores superiores a DÓLARES ESTADOUNIDENSES SIETE COMA CINCUENTA CENTAVOS (US\$ 7,5) por millón de BTU, resaltando que, históricamente, es el sector que pagó el precio de gas más caro y sufrió la mayor cantidad de cortes en el país y que para el resto de los usuarios, el PIST tiene pocas modificaciones desde 2019.

Continuó manifestando que el concurso del Plan Gas.Ar 2020-2024 dio un precio medio de alrededor de DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRES COMA CINCUENTA CENTAVOS (US\$ 3,5) el millón de BTU, superior al de los contratos anuales 2020, y que continúan creciendo.

Informó que del concurso de la prórroga del Plan Gas al año 2028 vamos a ver los precios que aparecerán y supone que serán un poco mayores y manifestó: *“Ahora bien: ¿qué decíamos en las audiencias de este año –en enero y en mayo– sobre los grandes usuarios? Decíamos que está vigente el Plan Gas.Ar 2020-2024, que volvía a incrementarse el PIST para estos usuarios, con dificultad para conseguir el gas para los contratos de mayo 2022. Esto fue historia. Lamentablemente, se cumplió y los precios variaron desde DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRES COMA TREINTA Y UNO (US\$ 3,31) hasta más de DÓLARES ESTADOUNIDENSES SIETE (US\$ 7) el millón de BTU para estos usuarios”*.

Indicó que durante los inviernos del 2021 y 2022, se debió recurrir a soluciones de último momento para tratar de abastecer a la demanda industrial y que esta situación no debería repetirse en mayo de 2023.

Informó que la actividad industrial total hoy cuenta con UN MILLÓN CIENTO SESENTA MIL (1.160.000) empleos registrados.

Seguidamente, a través de la imagen gráfica exhibida informó lo sucedido con la actividad PYM Industrial, que son los mayormente categorizados como usuarios P3 y G.

Indicó que el año 2020 fue catastrófico, que hubo una recuperación en 2021 y que el 2022 está “*ahí*” (sic), manifestando que las ventas deflactadas de las pymes industriales registran una caída de UNO COMA DOS POR CIENTO (1,2%) interanual, en el primer trimestre de este año, que el empleo registró una suba del DOS COMA DOS POR CIENTO (2,2%) en el primer trimestre, ubicándose solo un CERO COMA DOS POR CIENTO (0,2%) por debajo de los niveles del mismo trimestre durante el año 2019.

Seguidamente, manifestó que dado que la transición energética es una oportunidad para desarrollar nuestros enormes recursos gasíferos; que el PIST logró bajar en Argentina a DÓLARES ESTADOUNIDENSES CUATRO (US\$ 4) el millón de BTU, gracias al desarrollo tecnológico y la productividad de la oferta; y que la demanda industrial necesita tener un precio competitivo y previsible del gas, ya sea en forma de energía y/o materia prima, desde la UIA solicitan consensuar una política energética; escalar la producción de gas en Vaca Muerta, los yacimientos convencionales y en el *off shore* del Mar Argentino, promoviendo la producción local de equipos y servicios; tener operativo el primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner antes del invierno 2023, solicitando, como se hizo con los P3, resolver la situación de los usuarios categorizados como G.

Finalmente, solicitó priorizar la demanda interna de gas, en especial la industrial, que es una fuente de trabajo genuino.

7.- Mariana Grosso, en representación de la Defensoría del Pueblo de la Nación: En primer lugar, manifestó que del informe técnico surge que el objetivo del Poder Ejecutivo es proteger los derechos de los usuarios y usuarias actuales y futuros y cuidar sus ingresos, y que coinciden con esa posición, siendo la proporcionalidad o el cuánto del subsidio una decisión de política económica ajena a la competencia de esa institución.

Sostuvo que en el informe técnico se plantean CUATRO (4) escenarios, realizados a partir de los niveles de segmentación de usuarios que, con la quita de subsidio, determinan incrementos en el precio del gas, que van desde el SESENTA Y CUATRO COMA CINCO POR CIENTO (64,5%) hasta el DIEZ COMA SEIS POR CIENTO (10,6%) solo para el Nivel 2, explicando estos escenarios, a su vez, por subzonas y tomando como ejemplo un usuario categoría R3.1.

Manifiesta que si bien se hacen las simulaciones de cómo quedarían las facturas y que incluirían impuestos y tasas, desconocen si van a mantenerse las tarifas en transporte y distribución, y que otros serían los resultados de existir aumentos en el transporte y en la distribución.

Expresó que una gran preocupación de esa Defensoría son aquellos usuarios y usuarias que no se inscribieron en el registro y que pasan a ser considerados como de mayores ingresos y tal vez no se evaluó si estaban en condiciones de efectuar la inscripción por falta de acceso a la tecnología, ser adulto mayor o imposibilidades culturales para hacerlo y que al decidirse la proporción del precio de gas natural en el PIST que dejará de tomar o bien tomará a su cargo el Estado, debe incluirse el análisis sobre la capacidad económica financiera de los usuarios, puesto que éstos afrontan aumentos en otros servicios básicos, en productos que hacen a la subsistencia, como ser, alimentos, alquileres, colegios, etcétera, resaltando que los incrementos salariales resultan insuficientes, con impacto en el salario real y en el poder de compra, pérdidas de fuentes de trabajo, estando frente a una crisis en el nivel de ingreso del sector hacia el área de los comerciantes, en general, lo cual hace necesario adoptar

medidas en defensa y resguardo de sus intereses.

Continuó manifestando que debe contemplarse, ineludiblemente, las circunstancias sociales, políticas y económicas del país y que imponer a usuarios y usuarias nuevos precios en el gas implica analizar si están en condiciones de soportar el pago de facturas superiores a las vigentes y que los pagos del servicio no deben disminuir la capacidad de las personas para adquirir otros bienes que se relacionen con la dignidad propia y los derechos que de allí se desprenden: a la salud, a la educación, a la alimentación y a una vivienda digna; es decir, se debe analizar si estos incrementos pueden llevar a la exclusión del servicio con afectación directa de derechos humanos fundamentales, toda vez que el suministro de gas es un servicio esencial y el Estado debe arbitrar todas las medidas para garantizar la accesibilidad y la asequibilidad.

Indicó que, en lo que a tarifa social refiere, debe mantenerse el esquema de la bonificación del CIEN POR CIENTO (100%) en el precio del gas, y que, en cuanto al Programa Hogar, en el caso de aprobarse nuevos precios máximos para garrafas, debe también incrementarse el subsidio a los beneficiarios del programa, pues ello afecta a quienes no poseen red de gas natural y se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

Para finalizar, sostuvo que desconocen cuál será el monto final que abonarán los usuarios y las usuarias, incluyendo el precio de gas, transportes, distribución, impuestos y tasas, pues es incierta la misión que realizará el Estado sobre los escenarios propuestos y que por ello el Estado debe evaluar si la factura final del usuario, incluidas las tasas e impuestos, resultará razonable, no solamente justa –ello por el imperativo del Artículo 42 de la Constitución Nacional– y de igual manera, evaluar si la tarifa resulta asequible –ello por imposición del derecho convencional y la Agenda 2030.

Indicó que saben que nos encontramos en una situación de emergencia y con una gran retracción de importantes sectores de la economía, y que toda política pública debe tener como centro a la persona; por lo tanto, todas las modificaciones que tengan un impacto en las facturas no resultan solo una variable económica, sino que hacen a los derechos esenciales de los usuarios y usuarias del servicio, a los cuales el Estado se obligó a suscribir en la Agenda 2030 y demás tratados internacionales de derechos humanos.

8.- Daniel Horacio Martini, en representación de la Asociación de Distribuidores de Gas: Expuso la posición de la Cámara que integran las distribuidoras Camuzzi, Ecogas, Gasnea, Gasnor, Litoral Gas, Metrogas y Naturgy.

En primer lugar, indicó tal como lo recuerda el informe técnico presentado en la audiencia, que la factura final que reciben sus usuarios se conforma por la suma del precio del gas con el costo de transporte, el costo de la distribución y los impuestos.

Añadió que, en ese proceso de integración, es necesario recordar que las empresas distribuidoras tienen derecho al *pass through* o principio de la neutralidad económica, esto es, a que las variaciones en el precio de adquisición del gas se trasladen a los usuarios finales sin producir beneficios ni pérdidas.

Destacó, además, que los acuerdos de compraventa de gas firmados en el marco del plan Gas.Ar establecieron que el precio del gas que las distribuidoras pagarán a las productoras será en pesos por metro cúbico y el de los cuadros tarifarios vigentes.

Por otro lado, expresó que desde 2019 estamos en un período que podríamos calificar como de transitoriedad. En este periodo, el margen de distribución, como se observa en la imagen gráfica exhibida, aumentó un OCHENTA POR CIENTO (80%), muy por debajo del DOSCIENTOS CINCUENTA POR CIENTO (250%) aproximado que aumentaron todas las variables de la economía, pero el precio del gas se incrementó de manera imprevista un

CIENTO VEINTINUEVE POR CIENTO (129%).

Ante ello, preguntó ¿Por qué decimos de manera imprevista? Respondiendo que los aumentos transitorios se aceptaron y las actas acuerdo y adendas fueron firmadas por las distribuidoras sin calcular variaciones en el precio del gas natural.

Asimismo, señaló que un aumento en el precio del gas PIST genera pérdidas a las distribuidoras. En ese contexto, añadió que la mayor y más crítica es la del gas natural no contabilizado, que es el gas que las distribuidoras compran y deben pagar a las productoras, pero que, producto de pérdidas técnicas de la operación del servicio, no pueden facturar a los usuarios.

Sostuvo ante ello, que las pérdidas son significativas: se miden en miles de millones de pesos y han sido puestas en conocimiento de las autoridades en reiteradas ocasiones.

Al respecto, expresó que si proyectamos estas pérdidas incrementales a la luz de los escenarios de aumento de precio de gas que se consideran en esta Audiencia Pública, vemos que éstas podrían crecer en conjunto hasta los casi PESOS VEINTE MIL MILLONES (\$ 20.000.000.000) anuales.

A continuación, indicó que el gráfico exhibido permite dimensionar claramente la cifra, agregando que estos incrementos no previstos de costos se llevan buena parte, por no decir casi la totalidad, del aumento transitorio de margen firmado y aceptado por las distribuidoras en marzo de 2022. Expresó, además, que estos PESOS VEINTE MIL MILLONES (\$ 20.000.000.000) equivalen al OCHENTA POR CIENTO (80%) del aumento transitorio que las distribuidoras recibieron en el último mes de marzo.

Finalmente, manifestó que para garantizar la neutralidad económica a la que sus asociadas tienen derecho en el proceso de compra de gas, quieren compartir sus propuestas y solicitudes.

Respecto del Plan Gas.Ar, señaló que las distribuidoras han adherido desde el comienzo al plan, pero no pueden estar de acuerdo ni consentir las modificaciones que se pretenden imponer en los contratos legalmente vigentes entre productoras y distribuidoras, especialmente en lo referido a la cláusula de precio.

Agregó que, en materia de gas natural no contabilizado, el precio se debe retrotraer al valor de gas PIST vigente en mayo de 2022 o, en su defecto, se debe revisar el margen de distribución surgido del acuerdo tarifario de transición de 2022.

Afirmó que las distribuidoras tienen derecho al principio de neutralidad económica frente a las variaciones en el precio del gas.

Por último, indicó que las variaciones en el precio de gas generan sobre costos muy relevantes para las compañías que no fueron previstas al momento de aceptarse los aumentos transitorios y, de firmarse las actas acuerdo, el más importante es el gas natural no contabilizado que se lleva buena parte de los aumentos recibidos, resaltando ante ello que, si las distribuidoras no son sustentables, se compromete el sostenimiento de toda la cadena de valor de la industria del gas natural por redes.

9. Ingeniero José Luis Kelly, en representación del Instituto de Subdistribuidores de Gas de la Argentina (ISGA): En primer lugar, enfatizó sobre la acuciante situación de su sector, manifestando que el mismo viene sufriendo las consecuencias de los congelamientos y atrasos en el reconocimiento de los costos de operación y mantenimiento de la distribución de gas, ya que, en más de TRES (3) años, los costos se incrementaron cerca del

TRESCIENTOS POR CIENTO (300%) en promedio y su ingreso en menos del OCHENTA POR CIENTO (80%).

Resaltó, asimismo, que las subdistribuidoras de gas se conforman principalmente por empresas cooperativas, Sapems –provinciales y municipales– y empresas privadas, todas pymes que tienen origen hace más de TREINTA (30) años, casi todas antes de la privatización de Gas del Estado.

Sostuvo que, para tener una rápida idea de la significación del colectivo SDB, de los aproximadamente NUEVE MILLONES (9.000.000) de usuarios de gas por redes que existen en Argentina, QUINIENTOS MIL (500.000) son atendidos por unas SESENTA Y CINCO (65) subdistribuidoras, que prestan el servicio público de subdistribución de gas por redes en más de DOSCIENTAS (200) localidades en el país, en general, las más alejadas y de menor densidad y recursos.

Añadió, que las SDB siempre han sido significativos proveedores de empleos locales y han servido de impulsores de desarrollo de las comunidades en las que están, lo que también representa un diferencial en la calidad del servicio que reciben las comunidades en las que están insertas. Agregó, en ese contexto, que el volumen promedio diario por la SDB oscila entre DOS COMA TRES (2,3) millones de metros cúbicos, que representa solo el DOS POR CIENTO (2%) del mercado global del país, que alcanza un volumen diario de CIENTO DIECISEIS COMA OCHO (116,8) millones de metros cúbicos.

Aclaró, por otro lado, que la llegada a esta situación terminal tiene su origen en los cambios de la incidencia de los costos del gas respecto al precio de venta del mismo y, sobre todo, en el atraso de la actualización del precio de los cargos fijos. Hace VEINTIÚN (21) años estaba cercano a los DÓLARES ESTADOUNIDENSES DIEZ (USD\$ 10); hoy reciben entre SEIS (6) y DIEZ (10) veces menos que eso. Esto explica la situación que están viviendo.

Posteriormente, solicitó a las autoridades pertinentes respuestas concretas, manifestando que sino, en la próxima Audiencia Pública serían menos las que queden en pie, como está pasando en estos momentos, concluyó. A continuación, expresó que en los últimos años, con el tema del congelamiento de las tarifas de los servicios públicos y, en especial del gas, en medio de un ambiente inflacionario, está demostrado que no ha dado resultado, al menos para las pequeñas empresas que prestan los servicios en el interior del país, ya que lo que se ha logrado es que éstas vayan desapareciendo en manos de la distribuidora, por no poder hacer frente a las deudas originadas en la nula renta del servicio que prestan, producto del atraso en el reconocimiento de los costos para operar.

Indicó seguido de ello, que lo más paradójico de esta situación es que la subdistribuidora desaparece por no poder pagar el gas que compra la distribuidora, más los intereses confiscatorios que esta le aplica, pero, a su vez, las distribuidoras no pagan la totalidad del gas a los productores, por falta de recursos para llevar adelante la operación de su sistema de distribución, por lo que luego el Estado Nacional tiene que salir en su auxilio para saldar estas deudas, como lo hizo en el Decreto N° 263/2015 para distribuidoras y en el N° 312/2016; pero para las SDB no hubo ese tipo de auxilio.

Añadió que, en estos momentos, ven que la salida al problema de las deudas de la distribuidora tendrá la misma solución: las distribuidoras ya están pidiendo subsidio, pero para ese entonces habrán desaparecido muchas pymes SDB, quedando su servicio en manos de estas grandes empresas que recibirán subsidios millonarios para que puedan continuar prestando los servicios, manifestando, en ese contexto, que es menos costoso subsidiar el precio del gas para la SDB que hacerse cargo de los puestos de trabajo que perderán por su desaparición, al menos, hasta que se recompongan las tarifas acordes a los precios reales, costos de operación y mantenimiento.

Concluyó, indicando que resulta destacable el escasísimo impacto fiscal de la medida, atento que el volumen del gas que distribuyen alcanza escasamente el DOS POR CIENTO (2%), por lo que la asistencia que requieren solo representa en el mercado global menos del UNO POR CIENTO (1%), esperando, obtener resultado, porque q la situación de la SDB es más que acuciante.

10. María Victoria Noriega Sánchez, en representación de la Federación de Subdistribuidores de Gas de la República Argentina. (FESUBGAS): En primer lugar, manifestó que resultaba propicia la convocatoria para poder exponer la situación acuciante que viven los subdistribuidores.

A continuación, demandó a la Secretaría de Energía, a atender las particularidades que tiene el sector de la subdistribución, que cumple un rol clave, a lo largo y a lo ancho de nuestro país federal.

Expresó, además, que para tener una rápida significación de lo que implica el colectivo de la subdistribución, señalando que están distribuidos en todo el país federal, que son SESENTA Y CINCO (65) Pymes en un NOVENTA POR CIENTO (90%), que forman parte de economía social y solidaria, que atienden a DOSCIENTAS (200) localidades en todo el país.

También, indicó que son empresas locales, de capitales locales, que promueven el empleo local y que cumplen un rol social en cada una de las comunidades en las cuales se encuentran.

En ese contexto, agregó que las distribuidoras se encuentran en aquellos lugares en donde las grandes empresas distribuidoras no llegan, porque la ecuación económica no les cierra, indicando, que, en aquellos lugares, lo que hacen es garantizar el derecho al desarrollo local y el derecho al acceso a un servicio esencial, posibilitando, de alguna manera, el derecho al arraigo, evitando también el éxodo, la emigración y la concentración en las grandes urbes de nuestro país federal.

Destacó que, si bien prestan el servicio de una manera diferencial, porque se encuentran en el territorio cercano al usuario y a la usuaria, hasta el momento no han logrado que, desde la Secretaría de Energía, se realicen medidas que diferencien las particularidades de nuestro sector.

Por otro lado, señaló que es necesario tener una equidad distributiva y una solidaridad, haciendo referencia a la justicia, pero no se tienen en cuenta las particularidades que tiene el sector de la subdistribución. A continuación, expresó el apoyo a la política de segmentación energética, pero indicó que esta política está vinculada con la capacidad contributiva de los usuarios y usuarias, también tiene que aplicarse para las comercializadoras.

A continuación, propuso un trato diferencial para las subdistribuidoras, que haga justicia con sus condiciones. Indicó además que ese trato diferencial existió en algún momento en el precio del gas: se extendió desde el año 2009 al año 2016 y luego en el año 2017 fue modificado.

Solicitó, asimismo, un precio PIST diferencial para las subdistribuidoras. Esta medida reconocería la particularidad del sector y dejaría de equipararlas con las grandes empresas transnacionales distribuidoras, respetando así, entonces, el principio de justicia, de equidad distributiva y de solidaridad.

También resaltó que la totalidad de la actividad de la subdistribución se encuentra normada por el Estado Nacional. Por tanto, la existencia o no de las subdistribuidoras depende de las políticas públicas del Estado Nacional.

Concluyó, indicando en referencia a la existencia de la subdistribuidoras, que éstas deben existir no por ellas

mismas, sino por las localidades en las que prestan el servicio de gas natural, que se caracterizan por estar alejadas de las grandes urbes, pero que poseen el mismo derecho humano de acceso al servicio esencial del gas natural y de necesidad de potenciar el desarrollo de nuestra Argentina federal.

Agregó que las subdistribuidoras ponen al usuario en el centro de la prestación de servicio y otorgan una mejora en la calidad, justamente por la cercanía que tienen en el territorio y porque conocen a los vecinos y a las vecinas, y lo hacen al mismo precio que las distribuidoras.

Por último, requirió solicitar un precio especial del PIST para la subdistribución, que haga justicia con las características de este sector, indicando que es local, es nacional y pertenece a la economía social y solidaria.

11. Diego Mielnicki, en representación de la Defensoría Del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Manifestó, como primera medida, la baja participación que viene observando cada vez más; es decir, progresivamente, en estas audiencias públicas, va descendiendo la cantidad de expositores notablemente. Reiteró que esa situación, le parece que es una señal de atención o de alarma, al menos, para poner en duda el sentido real de este procedimiento administrativo, añadiendo que se deberían evaluar y pensar qué mejoras o modificaciones se pueden hacer para que estas audiencias tengan un valor un poco mayor. Sostuvo que la baja participación sostenida es algo que, al menos, nos deberíamos preguntar y reevaluar.

Reiteró lo dicho en las audiencias anteriores, expresando que éstas vienen a representar los derechos y los intereses de usuarios y usuarias de este servicio público esencial, enfatizando que siempre se van a poner desde esa mirada, más allá de que el eje de esta audiencia sea otro: el precio de gas a boca de pozo, concluyendo que van, una vez más, a observar algunas cuestiones respecto de los derechos de los usuarios y las usuarias de este servicio.

Indicó, en virtud de lo expuesto, que no se tiene que desconocer los importantes incrementos en los cuadros tarifarios que se operaron a partir de 2015, sumado a lo que sucedió a partir del año 2020 con la pandemia, que complejizó todavía más el panorama, dando como resultado –esto es lo que se evalúa diariamente en la Defensoría– un endeudamiento generalizado de usuarios y de usuarios, básicamente para poder afrontar el pago de estos servicios públicos.

Expresó, por otro lado, que los temas importantes, desde su visión, son la tarifa social y la segmentación tarifaria. Respecto de esto, indicó que evidencian alguna demora, que puede mejorarse, en el análisis de los casos particulares. También resaltó que hay errores administrativos en la categorización, en uno o en otro grupo de segmentación, señalando ante ello que se necesita una mayor asistencia del Estado Nacional.

Solicitó, como siempre han dicho, y lo reiteran hoy también, la ampliación y la mejora de la tarifa social y la correcta nivelación de las personas en el RASE para evitar que, con los aumentos y la inflación, estos beneficios se terminen desvirtuando, expresando, a continuación, que tienen algunas propuestas que intentarán resumir lo máximo posible.

Señaló, asimismo, que esperan que los incrementos generales impacten en las liquidaciones, que siempre sean inferiores al proceso inflacionario que venimos atravesando. En otras palabras: que sean inferiores al poder adquisitivo de las personas, de los usuarios.

Agregó, que es imprescindible robustecer el beneficio de la tarifa social e incrementar la cantidad de metros cúbicos establecidos para cada período del año, fundamentalmente, en época invernal; así como extender el límite de ingresos de DOS (2) a TRES (3) salarios mínimos vitales y móviles.

Para finalizar, presentó algunas cuestiones adicionales muy simples: anular el cobro a los usuarios de los cargos extraordinarios, que se denominan “gestión y envío de aviso de deuda común bajo firma” y/o “notificación fehaciente de aviso de deuda mediante carta documento o telegrama”. Expresó, que esos ítems podrían ser afrontados por las empresas distribuidoras o bien como parte de las cargas que asume el Estado Nacional. Para muchos usuarios de menores ingresos y para aquellos que están endeudados, estos montos que se aplican son muy difíciles de afrontar, engrosan la deuda inicial y representan, entonces, un impedimento adicional para regularizar la situación.

En segundo lugar, solicitó que se reduzcan o se anulen los intereses aplicados en las liquidaciones vencidas y en los planes de pago. Actualmente, la normativa habilita el cobro de hasta una vez y media la tasa pasiva nominal anual. En el contexto inflacionario actual, para muchos usuarios que, con enormes esfuerzos tratan de ponerse al día, la sumatoria de gastos e intereses lo tornan muy difícil o imposible.

En tercer lugar, requirió que se habilite el proceso de baja de titularidad, independientemente de la posibilidad de retiro de medidor, y considerar la condonación de deuda o su traslado a los usuarios no titulares del servicio. Resaltó que el procedimiento para desvincular la titularidad del servicio actualmente establece que la cuenta no debe tener deuda al momento de la solicitud y requiere que se realice el retiro de medidor en la propiedad para efectivizar la baja.

Por último, expresó que la baja administrativa debería ser automática, inmediatamente después del pedido del interesado, dando posterior aviso fehaciente de la situación al usuario no titular del servicio, para que abone, en caso de corresponder la deuda, y presente la documentación necesaria para quedar como titular de la cuenta, pero todo esto sin necesidad de afrontar el retiro del medidor y las posteriores dificultades que ello implica.

12. Pedro Alberto Bussetti, en representación de Defensa de Usuarios y Consumidores. (DE.U.CO): En primer lugar, recordó a su compañero Héctor Polino, y destacó la necesidad de que los argentinos paguemos el costo del gas a los valores de producción y no en dólares, con un incremento producido por la importación del producto por los barcos de GNL, etcétera.

En ese contexto, añadió que espera que el año próximo, si se inaugura el gasoducto Néstor Kirchner, el abastecimiento de gas natural en el orden interno sea suficiente para que el precio del gas en boca de pozo sea el que realmente surge de los costos de producción y no de todo este componente que se analiza en la audiencia.

En segundo lugar, manifestó que el informe de la audiencia indica que el costo total para atender la demanda prioritaria será de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES (USD\$ 2.935.000.000), equivalente a PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES (\$ 653.498.000.000).

Indicó que, en la audiencia de la segmentación del 12 de mayo, el informe de la Secretaría de Energía decía que el costo total para atender la demanda prioritaria era de DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRES MIL SESENTA Y TRES MILLONES (USD\$ 3.063.000.000), es decir, superior a lo que es actualmente, pero que el equivalente en pesos era de PESOS ARGENTINOS TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES (\$ 363.893.000.0000).

A continuación, resaltó que la devaluación de la moneda hace que hoy tengan que afrontar todos los usuarios un costo mayor en pesos de lo que hubiera sido –como se dijo el 12 de mayo–, cuando el dólar estaba valuado a PESOS DOSCIENTOS DIECIOCHO COMA TREINTA Y UN CENTAVOS (\$ 218,31) y en este momento, en la audiencia presente, a PESOS DOSCIENTOS VEINTIDOS COMA SESENTA Y SEIS CENTAVOS (\$

222,66).

Además, expresó que en la audiencia del 12 de mayo se dijo que los usuarios que posean mayor capacidad de pago tendrán que pagar el millón de BTU a DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCO COMA SETENTA Y SEIS CENTAVOS (USD\$ 5,76), equivalente a PESOS VEINTICINCO COMA VEINTICUATRO CENTAVOS (\$25,24) por metro cúbico.

Manifestó que, en la actualidad, el costo será de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCO COMA VEINTIDOS CENTAVOS (USD\$ 5,22); en el caso del escenario número 4, el costo en pesos sería de PESOS CUARENTA Y DOS COMA NOVENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 42,93), concluyendo que de acuerdo con los informes a los que hizo referencia, es menor en dólares respecto de la anterior versión.

Sostuvo, por otro lado, que en el informe se hace mención a la convocatoria de Audiencia Pública del 12 de mayo pero que esa audiencia no se dijo lo que luego se aplicó a partir del Decreto N° 332/22, agregando que en la audiencia se indicó que había un DIEZ POR CIENTO (10%) de usuarios que iban a estar afectados por la quita de subsidios y que ya estaba el padrón. Señaló, asimismo, que eso hoy ha sido modificado por el Decreto N° 332/2022 que obligó a todos los argentinos a hacer la declaración jurada.

También, expuso que *“como se ha reconocido públicamente, hay CUATRO MILLONES (4.000.000) de usuarios argentinos –esto lo dijo la Secretaría de Energía en una conferencia de prensa– que no presentaron la declaración jurada. Habrá una proporción importante también en el servicio de gas natural. Se trata de usuarios que, por no haber presentado la declaración jurada, estarán incluidos en el Nivel 1 y tendrán que afrontar, evidentemente, el costo total, sin subsidio”*.

En virtud de ello, expresó la necesidad de que eso se revisado, agregando que el Estado Nacional tendría que hacer todos los esfuerzos para que esos millones de argentinos puedan hacer la declaración jurada y ser incluidos en la categoría que corresponde; incluirlos automáticamente en el Nivel 1 que implica la quita total del subsidio, entendiendo ello como un grave problema y agregando que para eso se debería cumplir lo que dice el Decreto N° 332/2022, en el sentido de que la ANSES atendiera personalmente y se pusieran en actividad y atención al público a las distribuidoras.

Señaló, por otro lado, que lamentablemente los usuarios de ingresos medios van a tener aumento de tarifas en función de los excedentes que tengan sobre el tope que se les ha fijado.

Además, expuso que el costo que va a cubrir el Estado en atender la demanda prioritaria es de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES (\$ 653.498.000.000), agregando que el Congreso acaba de aprobar un plan de pago de las distribuidoras eléctricas por PESOS QUINIENTOS CINCUENTA MIL MILLONES (\$ 550.000.000.000) que van a tener la posibilidad de cancelar en OCHO (8) años, con SEIS (6) meses de gracia y una quita de los intereses del CINCUENTA POR CIENTO (50 %).

Finalmente, adicionó que los usuarios que quedaron endeudados como consecuencia de la pandemia fueron favorecidos por el *“Decreto 310”* (sic), que impedía el corte de los suministros, pero que ese decreto nunca fue reglamentado y, por lo tanto, los usuarios tuvieron que pagar los intereses que cobraron las distribuidoras eléctricas y las de gas natural, expresando, asimismo, que en razón de lo expuesto, se oponen a todo aumento del costo del gas en boca de pozo que implique un incremento en las facturas de los usuarios residenciales.

María Rosa Surita, en representación de la Red Nacional de Multisectoriales: Manifestó que mientras las

empresas “dueñas” de los servicios aplican arbitrariamente aumentos, desde el Estado se hace lugar a las audiencias públicas para que las usuarias y los usuarios manifiesten su parecer, sin dar lugar significativo a sus palabras y permitiendo que los aumentos sigan avanzando, olvidando que las tarifas están pautadas en dólares, que no saben de cuánto es el valor del gas en boca de pozo, que la segmentación dejará un tendal de usuarios y usuarias que pasarán de tener medidores prepagos a pagar tarifa plena, de tener gas de red a volver a la garrafa, simplemente por no haberse inscripto, ya que el decreto que otorgaba Internet como un servicio público esencial fue silenciado y dejado sin efecto por la Justicia.

Asimismo, aludió que las empresas que no pagan sus deudas exigen derechos, no realizan inversiones, pero siguen avanzando con los aumentos y los usuarios y las usuarias siguen pagando cada vez tarifas menos accesibles.

Indicó, además, que nuestro país ya no puede tolerar ningún tipo de aumento y que sufrimos un fenómeno nuevo, donde el trabajador asalariado tiene la condición de pobre. Por ello, solicitó que las empresas entiendan que deben invertir e indicó que los servicios públicos deben estar garantizados y regulados por el Estado, a favor de la población.

Finalmente, solicitó nuevamente desde la Red Nacional de Multisectoriales moratoria energética; volviendo a pedir condonación de deuda; y volviendo a decir “*basta de aumentos de tarifas*”.

Acto seguido, el Presidente de la Audiencia, Bioquímico Federico BERNAL, dio por concluida la Audiencia Pública convocada en virtud de lo dispuesto por la Resolución S.E. N° 771/2022.

V.- CONCLUSIONES

Como se anticipó, el presente informe de cierre es confeccionado de acuerdo a lo previsto respecto de la Audiencia Pública en el Artículo 36 del Anexo I del Decreto N° 1.172/2003 y en virtud de lo dispuesto por el Artículo 1° de la Resolución S.E. N° 809/2022. Dejándose constancia que, en dicho marco, se ha realizado la solicitud de publicación en el Boletín Oficial de un Aviso que contiene un resumen de la referida Audiencia en los términos de la normativa indicada, como así también se ha subido el mismo Aviso a la web de la Secretaría de Energía: [www.argentina.gov.ar/economía/energía](http://www.argentina.gov.ar/economia/energia), conjuntamente con la versión taquigráfica de la citada Audiencia.

Por último, de acuerdo a lo que prescribe el Artículo 38 del Anexo I del referido decreto, en un plazo no mayor de 30 (TREINTA) días de publicado el presente informe, el que también será agregado al Expediente N° EX-2022-121440322-APN-SE#MEC, la Secretaría de Energía emitirá la correspondiente resolución final y dispondrá su publicación en el Boletín Oficial.